



REPÚBLICA DE COLOMBIA  
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO  
**JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA**

Tunja, diecinueve (19) de noviembre de dos mil diecinueve (2019)

**Medio de control:** Reparación Directa  
**Demandante:** María Alix Torres Camacho  
**Demandado:** Municipio de Tunja  
**Radicación:** 15001-33-33-004-2019-000203-00

**1.- Antecedentes**

La señora María Alix Torres Camacho presentó solicitud de amparo para que sea liberada de incurrir en gastos ordinarios para presentar y adelantar proceso contencioso administrativo, en ejercicio del medio de control de reparación directa, por los daños sufridos con ocasión de la construcción de una vía que linda con la parte trasera de su vivienda, en consideración a que es una persona de avanzada edad, madre cabeza de familia y de escasos recursos económicos (f. 1).

**2.- Consideraciones**

El amparo de pobreza corresponde a una institución jurídica de carácter normativo, diseñada por el legislador para garantizar un acceso material a la administración de justicia, de quienes, por cuestiones económicas, no pueden sufragar los gastos que implica un litigio<sup>1</sup>; al respecto, la Corte Constitucional en Sentencia C-227 de 2009 afirmó:

*“Las particularidades de los procesos deben estar dirigidas a asegurar la prevalencia del derecho sustancial, el principio de eficacia de los derechos y la protección judicial efectiva. De allí, que sean entendidas como constitucionales justamente, las normas procesales que tienen como propósito garantizar la efectividad de los derechos y su eficacia material, y que además propendan por la optimización de los medios de defensa de las personas. Tal efectividad resulta ser entonces un principio y una garantía que debe ser asegurada por las disposiciones procesales fijadas por el legislador.”<sup>2</sup>*

Así mismo, esta institución se encuentra regulada en los artículos 151 a 158 del Código

<sup>1</sup> Conforme al criterio sentado por la Corte Constitucional, el acceso a la administración de justicia se define también como un derecho medular, de contenido múltiple o complejo, cuyo marco jurídico de aplicación compromete, en un orden lógico: (i) el derecho de acción o de promoción de la actividad jurisdiccional, el cual se concreta en la posibilidad que tiene todo sujeto de ser parte en un proceso y de utilizar los instrumentos que allí se proporcionan para plantear sus pretensiones al Estado, sea en defensa del orden jurídico o de sus intereses particulares; (ii) el derecho a que la promoción de la actividad jurisdiccional concluya con una decisión de fondo en torno a las pretensiones que han sido planteadas; (iii) el derecho a que existan procedimientos adecuados, idóneos y efectivos para la definición de las pretensiones y excepciones debatidas; (iv) el derecho a que los procesos se desarrollen en un término razonable, sin dilaciones injustificadas y con observancia de las garantías propias del debido proceso y, entre otros, (v) el derecho a que subsistan en el orden jurídico una gama amplia y suficiente de mecanismos judiciales -acciones y recursos- para la efectiva resolución de los conflictos. Corte Constitucional, Sentencia 426/2002. M.P.: Dr. Rodrigo Escobar Gil.

<sup>2</sup> Corte constitucional, Sentencia C-227/2009. M.P.: Dr. Luis Ernesto Vargas Silva.

General del Proceso, en virtud de los cuales se persigue la exoneración de las expensas que demande un proceso judicial en los eventos en que una parte no se encuentre en capacidad de atender “los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y de las personas a quienes por ley debe alimentos”, así lo ha señalado el Consejo de Estado<sup>3</sup>:

*“Precisamente el objeto de esta figura es garantizar, en condiciones de igualdad, el acceso a la administración de justicia, de aquellas personas que, por su precaria situación económica, ven limitada la posibilidad de materializar los derechos y garantías consagrados por el legislador.”*

En consecuencia, el objeto del amparo es asegurar a las personas más necesitadas de la defensa de sus derechos, colocándolos en condiciones de acceder a la administración de justicia, derecho fundamental consagrado en el artículo 228 de la Constitución Política.

Tenemos entonces, que el amparo de pobreza opera por petición de parte y puede solicitarse, si es parte demandante dentro del proceso, antes de la presentación de la demanda, o por cualquiera de las partes durante el curso del proceso, esto de conformidad con lo dispuesto en el artículo 152 del Código General del Proceso.

Respecto al trámite para conceder el beneficio, es suficiente afirmar que se está en las condiciones de penuria económica, cuando no se tiene lo necesario para vivir, o se tiene con mucha escasez, lo cual, en términos de la norma, se da cuando la persona no se halla en capacidad de atender los gastos del proceso sin menoscabo de lo necesario para su propia subsistencia y la de las personas a quienes por ley debe alimentos, requisitos que han sido reiterados por el Consejo de Estado<sup>4</sup>.

La anterior declaración que debe presentar quien solicita el amparo de pobreza se entiende prestada bajo la gravedad del juramento, sin que para proferir una decisión favorable se requiera de un trámite especial o de la práctica de pruebas adicionales.

Así las cosas, una vez concedido el beneficio, el amparado queda exonerado de los gastos del proceso, tales como honorarios de abogado y de auxiliares de la justicia, el otorgamiento de cauciones judiciales, el pago de agencias en derecho, entre otras expensas que establece la ley para la marcha y culminación de la causa.

No obstante, en el evento de que posteriormente se logre demostrar que fue falsa la afirmación, debe revocarse el beneficio concedido, y disponer el inicio de las acciones correspondientes por falso testimonio, de acuerdo con lo previsto en el artículo 167 ibídem.

<sup>3</sup> Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera, Auto del 16 de junio de 2005. C.P.: Dr. Alier Eduardo Hernández Enríquez. Radicado 27432.

<sup>4</sup> Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Segunda Sub sección B Consejera Ponente Sandra Lisset Ibarra Vélez del 4 de febrero del 2016 Radicado N° 11001-03-25-000-2011-00574-00(2201-11)

**3.- Caso Concreto**

En el caso bajo estudio, la señora **María Alix Torres Camacho**, mediante petición radicada el 25 de octubre de 2019 (fs. 1 a 22), manifestó su solicitud de amparo de pobreza para promover medio de control de Reparación Directa; además solicitó que para el trámite de la demanda se designe un defensor público adscrito a la Defensoría del Pueblo Regional Boyacá, con sustento en que en dicha entidad ya conoce de su caso (f. 25) y manifestó que es una persona de avanzada edad, madre cabeza de familia y de escasos recursos económicos.

De acuerdo con los argumentos expuestos por la solicitante, este Despacho concluye que se cumplen las condiciones para conceder el amparo de pobreza, el cual tendrá los efectos previstos por el artículo 154 del Código General del Proceso, en virtud del cual el amparado por pobre no estará obligado a prestar cauciones procesales ni a pagar expensas, honorarios de abogado o auxiliares de la justicia u otros gastos de la actuación, y que no será condenado en costas.

Ahora bien, en cuanto a la designación de apoderado judicial con la finalidad de presentar la demanda de reparación directa, considera el Despacho que dicha función deberá ser asumida por un defensor público designado por la Defensoría del Pueblo, en consideración a lo dispuesto en los artículos 281 y 282 superiores y el artículo 21 de la Ley 24 de 1992<sup>5</sup>, razón por la cual se ordenará oficial al Defensor del Pueblo Regional Boyacá, para que designe un defensor público en el área Contencioso Administrativa, que asuma la representación judicial de la señora **María Alix Torres Camacho**, para la presentación de la demanda y el trámite del medio de control de reparación directa que pretende instaurar, y se remitirá para ello copia de la solicitud vista a folios 1 a 22.

Por lo anteriormente expuesto, el Juzgado Cuarto Administrativo de Oralidad del Circuito de Tunja,

**RESUELVE**

**PRIMERO.- Conceder el amparo de pobreza** solicitado por la señora **María Alix Torres Camacho**, de acuerdo a lo manifestado en la parte motiva de esta providencia.

**SEGUNDO.- Oficiar al Defensor del Pueblo Regional Boyacá**, para que designe un defensor público en el área Contencioso Administrativa, que asuma la representación judicial de la señora **María Alix Torres Camacho**, para la presentación de la demanda y el trámite del medio de control de reparación directa que pretende instaurar, para lo cual se remitirá copia de la solicitud vista a folios 1 a 22.

<sup>5</sup> "Por la cual se establecen la organización y funcionamiento de la Defensoría del Pueblo"

**Tercero.** Por Secretaría, de la anterior decisión notifíquese a la señora María Alix Torres Camacho por el medio más expedito, para lo de su cargo.

**NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE**

  
**ÁNGELA MARÍA JOJOA VELÁSQUEZ**  
**JUEZ**

CEAP

JUZGADO CUARTO ADMINISTRATIVO DE ORALIDAD DEL CIRCUITO DE TUNJA
NOTIFICACIÓN POR ESTADO
LA ANTERIOR PROVIDENCIA SE NOTIFICA POR ESTADO ELECTRÓNICO
N.º <u>56</u> De Hoy 20 de noviembre de 2019 a las 8 00 a.m.
 FERNEY MAURICIO DÍAZ HERNÁNDEZ Secretario

\* Esta providencia fue notificada en estado electrónico el 20 de noviembre de 2019 en la página web www.corteconstitucional.gov.co. Ferney Mauricio Díaz Hernández – Secretario